



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-018-2021-00171-01
Demandante:	León Jaime Calle Bohórquez
Demandado:	Colpensiones, Colfondos S.A. y Protección S.A.
Asunto:	Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, abril veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 10 de febrero de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

PROTECCIÓN S.A., proceso al cual fue vinculado COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS. Radicado 05001-31-05-018-2021-00171-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ, convocó a juicio a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; se ordene a Colpensiones a aceptar el traslado al Régimen de Prima Media y reactivar la afiliación en dicha entidad.

En respaldo de tales súplicas, se expuso en síntesis, que el señor LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ, se afilió al ISS para los riesgos de I.V.M., posteriormente, el 2 de junio de 2016 se trasladó a Protección S.A., traslado que aduce obedeció a una asesoría muy conveniente a los intereses de Protección S.A., sin que en ese momento se hubiera suministrado información adecuada, suficiente, y cierta para el traslado, además de que no le explicaron al actor los beneficios, ventajas y desventajas de la afiliación.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que no le constan los hechos de la demanda, toda vez son ajenos a la entidad, corresponden a pretensiones o deberán ser demostrados por la parte.

A su vez, propuso las excepciones de carga dinámica de la prueba – particularidades del caso; inoponibilidad por ser tercero de buena fe; improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia

de la obligación; inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones; prescripción; devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados; inexistencia de la obligación de pago de intereses moratorios a cargo de Colpensiones; buena fe de Colpensiones; improcedencia de condena en costas y compensación.

Por su parte, **COLFONDOS S.A.**, manifestó que no le constan los hechos, por tratarse de circunstancias del demandante y terceros ajenos a la entidad, por lo que se hace imposible una respuesta, sin embargo, refirió que el traslado realizado por el demandante obedeció a que se le brindó una asesoría de manera integral y completa sobre el régimen general de pensiones, resaltando que la vinculación o traslado depende exclusivamente del cliente, quien determina la conveniencia del mismo, luego de examinar los beneficios y desventajas de los diferentes regímenes o administradoras, tal y como ocurrió con el demandante quien luego de haber recibido la asesoría pertinente optó por trasladarse de manera libre, informada, libre y espontánea.

En oposición a la prosperidad de las excepciones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; innominada o genérica; ausencia de vicios del consentimiento; validez de la afiliación al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por Colfondos S.A; prescripción de la acción para solicitar la nulidad de la afiliación; compensación y pago; validez de la vinculación inicial al sistema general en pensiones específicamente al RAIS administrado por Colfondos S.A.

Finalmente, se advierte que, mediante auto del 3 de junio de 2022, se dio por no contestada la demanda por parte de **PROTECCIÓN S.A.**

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 10 de febrero de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia de la afiliación del señor León Jaime Calle Bohórquez al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos S.A., y por ende la movilidad entre administradoras; ordenó a Protección S.A., efectuar el traslado de los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones, rendimientos, las cuotas de administración debidamente indexadas, primas de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima con cargo a sus propios recursos a Colpensiones, en igual sentido, ordenó a Colfondos S.A., devolver debidamente indexados los gastos de administración, primas de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima con cargo a sus propios recursos a Colpensiones, ordenando a esta última a reactivar la afiliación del actor y continuar como su administradora de pensiones; declaró infundada la excepción de prescripción y condenó en costas a Protección S.A. y Colfondos S.A.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de la parte actora, a fin de solicitar se confirme la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta lo acreditado en el plenario y la argumentación jurisprudencial expuesta por la juez.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta en favor de Colpensiones, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ nació el 17 de agosto de 1967, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 28 del anexo 04 del expediente digital.
- Que el actor se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Colfondos S.A., el 13 de marzo de 2000, retornó al Régimen de Prima Media el 4 de abril de 2008 y finalmente se afilió a Protección S.A., el 19 de mayo de 2017, de conformidad con la certificación SIAFP, obrante a folios 8 del anexo 23 del expediente digital.
- Que el accionante acredita un total de 1986.15 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por Protección S.A. el 8 de junio del 2022, obrante a folios 42 a 60 del anexo 18 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz el traslado efectuado por el demandante el 14 de marzo de 2000 al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Colfondos S.A., así como la afiliación realizada a Protección S.A., el 19 de mayo de 2017?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteados se resuelve bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto de afiliación a Colfondos S.A. y Protección S.A., por el incumplimiento del deber de información, y por lo tanto, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria del demandante a Colpensiones, incluyendo los gastos de administración, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las cuotas por seguros previsionales, debidamente indexados, razón por la cual deberá CONFIRMARSE la sentencia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente

definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser*

inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional del señor LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual

con Solidaridad, a través de la AFP Colfondos S.A., el 13 de marzo de 2000, asimismo, que el demandante retornó al Régimen de Prima Media el 4 de abril de 2008, efectuando nuevo traslado de régimen pensional, tras afiliarse a Protección S.A., el 19 de mayo de 2017, de conformidad con la certificación SIAFP, obrante a folios 8 del anexo 23 del expediente digital, advirtiendo que no solo reposa copia de la solicitud de afiliación a Protección S.A. y no así la de Colfondos S.A., no obstante, el formulario de afiliación no da cuenta de la información que fue brindada al accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte rendido por el actor, no es posible deducir confesión alguna, pues indicó que se afilió a Colfondos S.A. porque todas las personas que trabajaban en la compañía donde iba a ejercer el puesto, estaban afiliados a dicha entidad y el jefe en ese momento le dijo que se afiliara a Colfondos S.A., entonces se afilió sin recibir ninguna asesoría, manifestando que luego ingresó nuevamente a Colpensiones, y estando en la Gobernación de Antioquia, llegó una niña de Protección S.A., que le dijo que la entidad le ofrecía una jubilación mayor que en Colpensiones y por eso se pasó.

En el anterior contexto, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que Colfondos S.A. y Protección S.A., cumplieran con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada del afiliado, sobre las implicaciones del traslado.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó tanto Colfondos S.A., como Protección S.A. al demandante, al momento de efectuarse los traslados de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, destacándose que lo correcto es que se hubiera declarado la ineficacia de cada una de las afiliaciones a las administradoras del régimen privado, en tanto que ambas comportaron un cambio de sistema pensional, y no únicamente la ineficacia de la afiliación a Colfondos S.A. y posterior movilidad a Protección S.A., pues se acreditó que de Colfondos S.A., el gestor del proceso retornó al extinto ISS, interrumpiéndose así su permanencia en el RAIS.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización del demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión del actor.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que tanto como Colfondos S.A., como Protección S.A., dieron lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información, por lo tanto, deben asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad del demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación del pretensor, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual del demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de las AFP demandadas y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio

que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de aborro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

En sentido similar se pronunció la citada Corporación en sentencia SL 3034 de 2021, en la cual, sobre el punto, se señaló:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Sobre la indexación de los conceptos a trasladar

Finalmente, cumple memorar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones.

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impuesta por la a quo, se encuentra ajustada a los anteriores criterios, imponiéndose la confirmación íntegra del fallo, resaltando que, si bien la funcionaria ordenó el traslado de las primas de reaseguros de Fogafín, concepto que a juicio de la Sala no es procedente ordenar, ninguna de las accionadas presentó reparo al respecto, y en tal sentido, no es posible revocar dicha orden.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral de Circuito de Medellín, el 10 de febrero de 2023, en el proceso ordinario instaurado por el señor LEÓN JAIME CALLE


BOHÓRQUEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

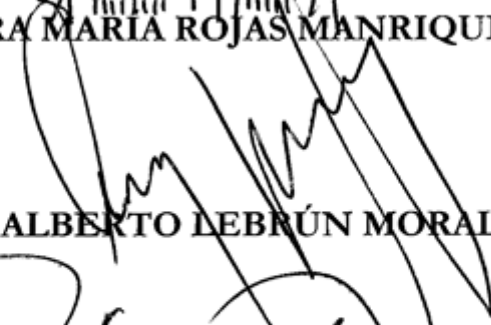
2.- Sin Costas en esta instancia.

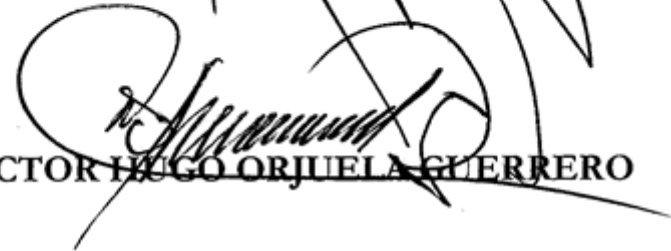
3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO